



Boletín WRM 253
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Noviembre / Diciembre 2020

Crimen, poder e impunidad en los bosques



Nuestra Opinión: Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son.....	2
Legal pero corrupto.....	4
La explotación sexual y la violencia contra las mujeres están a la raíz del modelo industrial de plantaciones.....	7
El robo organizado de tierras para plantaciones industriales de árboles en Brasil: el caso de AMCEL.....	11
Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”.....	17
Leyes, crimen y deforestación en el campo tailandés.....	24
RSPO: la tercerización de la reglamentación ambiental a las empresas y la industria de la palma aceitera.....	28

RECOMENDADOS

Tribunal Africano de los Pueblos en contra de las empresas de plantaciones industriales....	32
2020: un año de resistencia y rebelión.....	32
Una explicación de los nuevos mercados financieros sobre la destrucción de la naturaleza	32

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: The Corner House, Reino Unido; mujeres activistas en Costa de Marfil, Sierra Leona y Camerún; miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) en Amapá, Brasil; seis mujeres y hombres activistas a lo largo de Indonesia; Land Watch Thai, Tailandia; Dra. Bernice Maxton-Lee; y miembros del Secretariado Internacional del WRM

Crimen, poder e impunidad en los bosques

Nuestra Opinión

Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son



Ilustración: Brian Stauffer, Human Rights Watch

¿Qué es un *crimen*? Según el diccionario, un *crimen* o delito es un acto ilegal por el cual alguien puede ser castigado por la autoridad gubernamental. Pero, entonces, ¿qué se considera un ‘acto ilegal’? ¿Y quién decide esto?

Lo que se considera como un *crimen* o delito, por tanto, siempre va acompañado por lo que no se considera como *crimen*. Y viceversa.

Son muchas las tácticas y estrategias empleadas para imponer el control de la tierra y las operaciones extractivas en los bosques. Varían tanto como las formas utilizadas para despojar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, medios de vida y culturas comunales. La mayoría de estas tácticas y estrategias son actos *criminales*. Sin embargo, en la percepción pública (y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley), *no se los considera criminales* y en cambio se los considera legítimos. Esto viene justificado con discursos sobre el “desarrollo nacional”, la “creación de empleo”, el “desarrollo bajo en carbono”, el “progreso”, etc.

El boletín anterior del WRM (1) reflexiona sobre lo que es el mal llamado desarrollo y advierte acerca de las estrategias que utilizan los actores que lo promueven para tomar el control de los territorios. Este boletín se centra en otro lado de esta historia.

El considerar acciones y decisiones particulares de empresas, bancos multilaterales y organismos gubernamentales como *no criminales* va de la mano de la *criminalización* de la mayoría de quienes disienten y resisten en el terreno. Quién decide qué debe considerarse criminal y qué no, está muy relacionado con el poder.

En este sentido, la economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen

de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o *no criminal* o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus *crímenes* sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial.

Los actos *criminales* o delictivos de actores públicos o privados ocurren constantemente en todo el mundo en formas muy diversas y cruzando diferentes capas de las sociedades. Otro artículo de este boletín expone cómo muchas prácticas perfectamente legales pero corruptas son rutina dentro de gobiernos y empresas, y con frecuencia incluso pasan por 'buena gobernanza' o son la misión declarada de organismos públicos.

Indonesia es un buen ejemplo. La implementación de la política económica neoliberal a fines de la década de 1960 fue dirigida por un grupo de economistas indonesios que estudiaron en la Universidad de California, Berkeley. Un economista de este grupo, apodado la Mafia de Berkeley, se jactó de haber presentado un 'libro de recetas de cocina' a Suharto. El 'éxito' de la violencia anti-izquierdista respaldada por Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública para aceptar la imposición de un régimen neoliberal de derecha, convirtió el libro de cocina de la mafia en un método portátil. Solo cinco años después de que Suharto asumiera la presidencia, apareció un grafiti en Chile previo al golpe respaldado por Estados Unidos que derrocó al socialista Salvador Allende. El grafiti decía "Yakarta se acerca". (2) Ahora parece que Jokowi, el actual presidente de Indonesia, con la controvertida Ley Ómnibus está reabriendo el libro de recetas de cocina de la Mafia de Berkeley. Un artículo de este boletín reflexiona sobre esta Ley y destaca las voces de seis activistas que se han resistido este 'libro de recetas de cocina' a lo largo de las islas durante décadas.

Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde el acaparamiento de tierras ha sido -y sigue siendo- parte de un fuerte sistema del *crimen* organizado. Allí, la palabra *grilagem* se utiliza para referirse a la producción ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles apariencia legal. Una práctica *criminal* que comenzó en la época colonial con el robo de tierras de los pueblos indígenas y que sigue siendo muy utilizada por el gran capital. Una entrevista con un miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT, por sus siglas en portugués) reflexiona sobre las tácticas utilizadas por la empresa Amapá Celulose (AMCEL), que es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles en la Amazonía. Las plantaciones de eucalipto con certificación FSC de AMCEL producen y exportan astillas de madera para la industria de la celulosa y para la producción de energía, entre otros a Dinamarca.

Otro artículo de este boletín destaca los actos *criminales* legalizados que ocurren en Tailandia, donde la prominencia política de los militares y las inclinaciones autoritarias del propio Estado deciden qué es *un crimen* y qué no. El artículo muestra varios casos en los que la ley se ha utilizado en los últimos años para *criminalizar* la resistencia de las comunidades que habitan en los bosques contra el acaparamiento de tierras. El artículo muestra las duras consecuencias para los activistas comunitarios cuando se *criminaliza* la resistencia con el fin de proteger los intereses del gran capital y de una élite política.

Pero otros actores de la sociedad también influyen en lo que se considera un *crimen* o delito y lo que pasa como una práctica legítima. Un ejemplo son los sistemas de certificación. Un

artículo del boletín muestra cómo el sello RSPO, que emite certificados para plantaciones industriales de palma aceitera con estándares de ‘sostenibilidad’, es administrada por los mismos productores que luego son juzgados por ella. Además, la legitimidad del Estado para establecer leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería fijar los estándares de ‘sostenibilidad’. Esto legitima las plantaciones de monocultivos, cuya gestión con demasiada frecuencia implica un *crimen* tras otro.

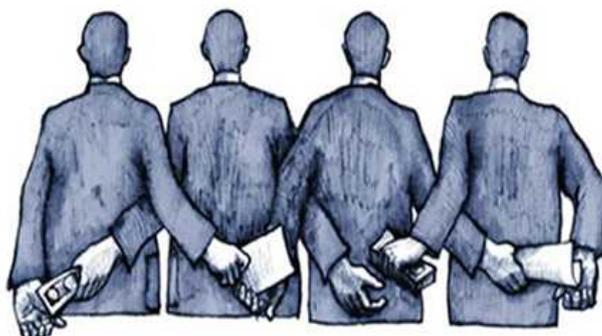
Lo que se suele llamar de “violaciones de los derechos de las personas”, por ejemplo, a menudo son lisa y llanamente *crímenes* que deben ser llevados a juicio. Asimismo, la mayoría de los llamados “impactos diferenciados” que deben soportar las mujeres por la imposición de plantaciones industriales u otras industrias extractivas, deben ser llamados por lo que son: *crímenes*.

Es hora de llamar a los *crímenes* y a los *criminales* por su nombre.

(1) Boletín 252 del WRM, Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación, <https://wrm.org.uy/es/boletines/nro-252/>

(2) Lausan, Jakarta is returning: The ‘neoliberal cookbook’ that guides Indonesia’s Omnibus Law, 2020, <https://lausan.hk/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills/>

Legal pero corrupto



Por lo general, la criminalidad es presentada como el oscuro trasfondo de la sociedad - un submundo poblado por marginados que viven para infringir las normas. Como argumento, tiene un claro atractivo para quienes están interesados en que lo convencional sea visto como “honesto”, “legítimo” y “decente”. Pero la realidad es que hace tiempo que la línea divisoria entre “la ciudadanía honorable y la penitenciaría” (como lo expresó la revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo) (1) es muy delgada. En efecto, puede decirse que las empresas capitalistas solo prosperan debido a que sus particulares formas de saqueo, robo, fraude y engaño han sido bendecidas con el agua bendita de la “legalidad”, mientras que otras formas, similares en sustancia, han sido consideradas “ilegales”.

La corrupción es una clara muestra de esto.

Algunos tipos de corrupción han sido criminalizados. En la actualidad, el soborno de funcionarios públicos está universalmente prohibido por ley, incluso en países, como Alemania, donde el soborno a funcionarios extranjeros (aunque no a funcionarios alemanes)

fue legal hasta hace 20 años. El soborno ya no puede ser deducible de impuestos en Bélgica, Dinamarca, Francia, Japón, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Austria, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, una práctica que también fue legal hasta mediados de la década de 1990. El fraude, la extorsión y el lavado de dinero son ilícitos en todas las jurisdicciones, aunque ni un solo banco de Estados Unidos ha sido enjuiciado jamás por el delito de lavado de dinero.

Pero el soborno, el lavado de dinero y el fraude no son lo primero ni lo último de la corrupción. De hecho, un enfoque restringido en tales crímenes (aun cuando sea vital investigarlos y enjuiciarlos) esconde numerosas prácticas perfectamente legales que el público general a menudo considera correctamente como corruptas. Algunos ejemplos incluyen: tratados ventajosos que le permiten a las empresas pagar impuestos mínimos; el nepotismo; hacer la “vista gorda” al acaparamiento de tierras de la época colonial que fundó las bases de numerosas grandes empresas que actualmente realizan sus actividades en los bosques; el uso de fuerzas militares para “proteger” inversiones privadas, violando con su accionar las vidas y formas de sustento de los ciudadanos; la eficaz inmunidad ante la justicia otorgada a empresas “demasiado grandes para ser condenadas”; la tolerancia oficial de conflictos de interés; la deliberada manipulación de vacíos legales que los abogados de las empresas hacen para eludir normas y reglamentaciones; y la privatización del diseño de políticas a través de presiones de grupos de interés y de donaciones políticas.

Aquí entra la marea continua de jefes de la industria, ex Ministros y funcionarios de gobierno que entran y salen (muy legalmente) por las puertas giratorias entre la política y los negocios. Aquí entran los comités de regulación bancaria, cuyos directivos (muy legalmente) son directores de los mismos bancos que se supone deben regular. Aquí entra la política egoísta que, a través de la privatización, la tercerización y las sociedades público-privadas ha transformado la prestación de los servicios públicos en sistemas de enriquecimiento fácil con la garantía de fondos públicos, que canalizan miles de millones de dólares de dineros públicos a las manos de inversionistas y financiadores privados. Aquí entran las instituciones y bancos de desarrollo del Norte global que presionan con su dinero de ayuda a funcionarios gubernamentales del Sur global para que establezcan las políticas neoliberales que beneficiarán a empresas de los países del Norte.

Varias de estas prácticas perfectamente legales pero aun así corruptas, son rutina dentro de gobiernos y empresas: incluso peor, tales prácticas con frecuencia se consideran como ‘buena gobernanza’. Algunas pueden incluso ser consideradas deberes del cargo; y muchas - la privatización, por ejemplo - son la misión declarada de organismos públicos. Esta normalización de la corrupción no es nueva: pero actualmente se ha extendido lo suficiente como para que Bruce Buchan, un destacado investigador de la corrupción, llame a nuestra era actual la “Época dorada de la corrupción”. (2)

No es tan solo que la ley, para utilizar la metáfora del escritor de sátiras anglo irlandés del siglo XVIII, Jonathan Swift, haya sido calificada como una telaraña que atrapa “moscas pequeñas pero deja pasar avispones y avispas”, si bien esto es muy cierto. Tampoco que la ley sea aplicada de manera desigual, aunque, nuevamente, esto sin duda alguna también es cierto - tres errores y vas a la cárcel si eres pobre y negro; ningún encarcelamiento si eres banquero. El deterioro es más profundo: las mismas políticas y leyes que manifiestan servir para combatir la corrupción son ahora un escudo para los corruptos.

Consideremos la definición de corrupción empleada por el Banco Mundial, a saber, “el abuso de un cargo público para beneficio privado”, una definición que ha servido de modelo para numerosas leyes y reglamentaciones ‘anticorrupción’. La corrupción se presenta como una patología exclusivamente del sector público: “el abuso del cargo público para beneficio privado”. Por tanto, la corrupción del sector privado está convenientemente excluida de la sanción legal. Es así que la definición convierte en “no corruptas” (y legales) a una serie de formas corruptas de manejo del poder, desde las contribuciones de políticas de las empresas hasta la influencia que ejercen a través de numerosas redes sociales de élite que vinculan a los directorios de las empresas con el gobierno.

El enfoque en la “ganancia privada” *individual* realizada por “funcionarios públicos” *individuales* también oculta las formas institucionalizadas de corrupción que actúan en beneficio de los intereses de grupos o clases, sin recompensar a ningún “funcionario” en particular directamente o en absoluto. Un funcionario que recibe una ganancia de un contrato del sector público infringe las reglas de la definición. Pero un político que utilice pagos ilegales de gobiernos extranjeros para financiar una campaña electoral sin obtener por ello personalmente beneficios económicos, no lo hace.

La fetichización de la corrupción del sector público tiene una utilidad estratégica adicional. Ignorando convenientemente la confabulación entre lo “público” y lo “privado” que hace posible la mayor parte de los casos de corrupción, concibe lo “público” (entendido como “el Estado” o “la burocracia inflada” o “los reguladores”) como una mano codiciosa, y lo “privado” (entendido como “el sector privado”) como su víctima, manchado solo porque se ve obligado a pagar sobornos para realizar su trabajo (no se menciona aquí el papel que desempeña el sector privado, principalmente occidental y multinacional, en facilitar el lavado del dinero obtenido por la corrupción).

Por lo tanto, las políticas anticorrupción pueden incluirse fácilmente (como ya lo están) a la causa de hacer retroceder al Estado, privatizar los activos estatales y dar al sector privado una mayor voz en la toma de decisiones. Esto supuestamente bajo la bandera de proteger intereses privados frente a ambiciosos funcionarios en busca de utilidades, quienes de otro modo pondrían obstáculos a las transacciones de los negocios. El resultado no es eliminar a la corrupción, sino más bien volver aceptables y normales a ciertos intereses corruptos dentro de la esfera de la toma de decisiones del gobierno.

Esto no debería sorprendernos. Porque, a pesar de la retórica de que lo “público” y lo “privado” son esferas separadas que deben mantenerse separadas, el entrelazamiento de ambas hace imposible tal separación. En efecto, una total separación, como señala el académico Peter Bratsis, tornaría a “la política tal como la conocemos... imposible”.

La cuestión es *quién* decide y *cómo* ese relacionamiento actúa o no para el bien común, lo que presupone un proceso mediante el cual la sociedad en su pluralidad (con todos sus diversos grupos) (y no solo el Banco) puede deliberar sobre lo que realmente constituye el bien común. Pero es precisamente este proceso el que ha sido corroído por la corrupción, por no hablar de la infinidad de otras formas de opresión arraigadas en una historia de colonialismo, racismo y patriarcado que excluyen a numerosos grupos de la sociedad de estos debates. Porque la trama común que atraviesa todas las formas de corrupción, desde el soborno hasta las puertas giratorias, es el apoderar o eludir las formas democráticas de deliberación.

Ese apoderamiento no es un efecto secundario no deseado del capitalismo: es esencial para su funcionamiento. De hecho, el entrelazamiento entre la corrupción y el capital es tal que desafiar la corrupción es desafiar al capitalismo moderno. Reconocer esto, y tomar en serio sus consecuencias, será sin duda esencial para que surjan estrategias y alianzas que permitan determinar el uso futuro de los bosques a través de políticas democráticas surgidas desde las bases, arraigadas en el respeto por los bienes comunes, y no por el estrecho interés del beneficio político o financiero.

Nick Hildyard. The Corner House, UK

- (1) Rosa Luxemburg, *The Russian Revolution*, Chapter 7, *The Struggle Against Corruption*, <https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch07.htm> ; *La Revolución Rusa*, 7. *La lucha contra la corrupción*, https://www.marxists.org/espanol/luxem/11Larevolucionrusa_0.pdf
- (2) Buchan, B. (2016) 'Our Golden Age of Corruption'. *Arena*. Disponible en: <http://arena.org.au/our-golden-age-of-corruption-by-bruce-buchan/>
- (3) Swift, J. (1707) *A Trritical Essay upon the Faculties of the Mind*. Disponible en: [https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/englischesseminar/swift/tritical_essay_typeset_ic.pdf](https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/englischesseminar/swift/trritical_essay_typeset_ic.pdf)
- (4) Banco Mundial (1997) *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*. World Bank: Washington DC. Disponible en: <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corruptn.pdf>

La explotación sexual y la violencia contra las mujeres están a la raíz del modelo industrial de plantaciones



Foto: AP News

Los colonizadores europeos se basaron en las plantaciones de monocultivos a gran escala para imponer su dominio sobre los pueblos y territorios a lo largo del Sur global. El modelo de plantaciones que impusieron - de una sola especie típicamente en la tierra más fértil y llana con abundantes fuentes de agua disponibles - continúa hasta el día hoy. Esta apropiación de vastas extensiones de tierra y el despojo perpetrado a las poblaciones locales todavía se mantiene a base de opresión. Las relaciones de poder desiguales sistemáticamente discriminan a los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y, en particular, a las mujeres.

La violencia inherente al modelo colonial de plantaciones no perdona a los sistemas de reproducción de la vida. Es decir, a los sistemas de organización colectiva, de soberanía alimentaria, de cuidado comunitario, de diversidad cultural y lingüística, de conocimientos

ancestrales, entre otros varios aspectos. Las partes de estos sistemas de reproducción que no pueden comercializarse suelen ser invisibilizados. Por lo tanto no se reconocen como trabajo. Las tareas asociadas generalmente recaen sobre los hombros de las mujeres. Por lo tanto, la violencia de las empresas de plantaciones también afecta a las mujeres en su rol como pilar de la cohesión comunitaria. La opresión patriarcal es inseparable del modelo industrial de plantaciones, un modelo que es la base de cómo las empresas de plantaciones generan beneficios. (1)

Mujeres que se enfrentan a las plantaciones industriales de palma aceitera administradas por la empresa luxemburguesa-belga SOCFIN en Sierra Leona, le dijeron al WRM que,

“La empresa se aprovecha del trabajo de las mujeres de varias maneras ... Cuando la empresa ya se ha apropiado de la tierra, la mayoría de las veces las mujeres no tienen otra opción que trabajar para la empresa. Porque no pueden volver a sus cosechas y realizar sus actividades normales; no pueden defender a sus familias; no pueden cuidar a sus hijos; ni siquiera pueden cuidarse a sí mismas ni llevar comida a la mesa. No pueden cultivar alimentos como de costumbre para su propio consumo, por lo que ahora tienen que comprarlos en los mercados. No les queda otra opción que buscar trabajo en estas plantaciones, con esta empresa.

Y la remuneración es mala. Las empresas son muy conscientes de que las mujeres no tienen otra alternativa, por lo que deciden cuánto pagarles e incluso cómo tratarlas. Las mujeres tienen que caminar todos los días desde lugares muy lejanos al trabajo y luego regresar haciendo caminatas muy largas, exponiéndose a la violencia.

Sus hijos, la mayoría de ellos, también se desvían. Porque si no puedes cuidar a tus hijos, especialmente a las niñas, cuando más te necesitan, buscarán cualquier cosa que un hombre pueda darles para sobrevivir. Así que los desafíos son muchos “.

Mujeres que se enfrentan a la empresa de aceite de palma PalmCi en Costa de Marfil, le dijeron al WRM que,

“Las empresas de palma aceitera sobreexplotan a las mujeres. Les puedo asegurar que les somos muy útiles; somos una mano de obra excepcional para las empresas. Cosechando frutos todo el día sin descansar, día tras día durante años.

Cuando los empresarios de Malasia visitan las plantaciones, tenemos que escondernos y evitar ser vistas. ¿Por qué nos esconden si el trabajo que hacen es legal? Otras mujeres se ven obligadas a taparles la boca a su bebés con la mano para amenorar el llanto y evitar ser detectadas. Las empresas sobreexplotan a las mujeres con el fin de lucrar. Eso es lo que está ocurriendo”.

Y mujeres que se enfrentan a la empresa de palma aceitera Socapalm en Camerún, una empresa que también forma parte del Grupo Socfin, le dijeron al WRM que,

“Las mujeres de diferentes pueblos en la zona tienen que caminar mucho para llegar a este pequeño terreno. Es el único lugar que pudimos encontrar para poner nuestros pequeños huertos. Mira, las papas son muy pequeñas. La plantación de palma aceitera está justo ahí, demasiado cerca. Nada crece bien porque las plantaciones están ahí. Como pueden ver,

ésa es toda la tierra que hay [que podemos utilizar]. Miren nuestro sufrimiento. Este pequeño terreno no puede producir lo suficiente para nuestras familias. La tierra produce muy poco porque tenemos que plantar en la misma parcela todos los años. Nos falta tierra para cultivar nuestros alimentos. Socapalm se apoderó de nuestra tierra. Socapalm se llevó todo ”.

Una vez que las empresas establecen sus plantaciones industriales, la violencia sexual y la opresión contra mujeres y niñas aumentan considerablemente. Violación, maltrato físico y psicológico, hostigamiento, persecución, trabajo a cambio de sexo, golpizas, intimidación, embarazos por violación, presencia de guardias armados dentro y alrededor de los hogares y las comunidades, bajos salarios, condiciones deplorables y largas jornadas laborales, trabajo no remunerado, uso constante de productos tóxicos sin protección, impactos en la salud sexual y reproductiva, pérdida de acceso a la tierra, el agua, los medios de vida y sustento - todo lo cual se traduce en trabajo doméstico y comunitario más duro, más intenso y más prolongado -, son solo algunos de los impactos de las plantaciones industriales que a menudo no se nombran sino que simplemente se denominan como “impactos diferenciados”. (2)

Los criminales tras estas horribles y constantes violaciones contra los cuerpos, las vidas y las mentes de las mujeres casi siempre quedan impunes.

Las mujeres de Sierra Leona agregaron que,

“La violencia contra las mujeres continúa sin que las autoridades locales o policiales intervengan demasiado. Si estás en contra de la empresa, nadie te escuchará.

Varias mujeres han sido arrestadas. Abusaron de ellas y las golpearon, por delitos que la mayoría de ellas niegan, y las llevaron a la policía para hacer frente a cargos en su contra. A nadie parece importarles lo que nos está pasando. Nadie quiere saber ni hacer nada contra estos criminales. Nos enfrentamos a numerosas dificultades con estas plantaciones. A veces se producen accidentes. Si te lesionas mientras trabajas o te enfrentas a cualquier otra dificultad, te despiden sin siquiera considerar cuidarte. Te dejan abandonada a tu propia suerte.

Actualmente la comunidad se ha impuesto el régimen de toque de queda. Porque después de las 12 de la noche no verás a ninguna mujer afuera. Todo el mundo sabe que será más seguro quedarse en casa.

Y para colmo, está el miedo que se ha extendido entre nosotras luego del último incidente en el que perdimos a dos personas de nuestra comunidad. Fue brutal. Cuando entraron la policía y el ejército, fue brutal. Arrestaron a mucha gente por la fuerza, incluida yo. Me arrestaron muy tarde en la noche. Estaba dormida, abrieron la puerta de mi casa a la fuerza, me sacaron, me golpearon y me llevaron detenida”.

Al respecto, las mujeres de Costa de Marfil también dijeron que,

“Las mujeres son víctimas de abusos físicos y de otro tipo. Golpeadas y acusadas injustamente con el pretexto de exigirles favores. También hay abuso sexual, pero esto se mantiene en secreto. Les dicen: ‘Te vi en nuestra plantación robando frutas. Cuidame y yo te cuidaré’, es lo que dicen. Lo que quieren decir es: ‘Te dejo irte con la fruta si tienes sexo

conmigo'. De hecho, este abuso va en aumento porque las plantaciones todavía siguen allí y los violadores también siguen allí.

¿Se castiga a los criminales? Usted debe estar bromeando; ¿quién los va a castigar? Ellos dirán que la mujer ingresó a una propiedad privada y se merece lo que obtuvo. Le preguntarán si tiene un "brazo largo", como decimos aquí. Es decir, si tiene una persona poderosa en su familia o conoce a algún miembro influyente del gobierno que pueda apoyar su reclamo. Nadie fue castigado por estos crímenes, a pesar de los brazos rotos y las niñas y mujeres traumatizadas. Estos delitos quedan impunes porque lo que vale es la ley del más fuerte".

También es de interés de las empresas y sus patrocinadores financieros (bancos de desarrollo regionales y de los países del Norte, el Banco Mundial, consultores financieros, etc.) que el dominio de un modelo patriarcal - en particular la violencia y el abuso contra las mujeres - que es parte integrante de este modelo industrial de plantaciones, permanezca invisible para los consumidores y, por lo tanto, sin consecuencias para quienes llevan a cabo esa violencia.

Sin embargo, contra todo pronóstico, las mujeres están al frente de la resistencia y la defensa de la vida.

Las mujeres de Sierra Leona nos dijeron que,

"Hemos estado haciendo todo lo posible a lo largo de los años para organizar y realizar protestas; hemos ido de una comunidad a otra, sensibilizando a otras mujeres de diferentes comunidades, para no ceder a los acuerdos que se están haciendo en nuestro nombre. Hemos solicitado la inclusión en todos los aspectos de los acuerdos de tierras en nuestra comunidad. Nos aseguramos de recordarle a nuestras autoridades que no queremos nada con Socfin. Que lo que queremos es recuperar nuestras tierras.

En este contexto, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera se unió para denunciar la violencia y el abuso sexual que sufren cotidianamente miles de mujeres que viven dentro y alrededor de las plantaciones industriales de palma aceitera, particularmente en los países de África Occidental y Central. El video se solidariza con todas las mujeres que se organizan para resistir estas plantaciones y que sufren solas y en silencio esta violencia y abuso.

Pueden ver el video en inglés, francés, español y portugués en: <https://wrm.org.uy/es/?p=18990>

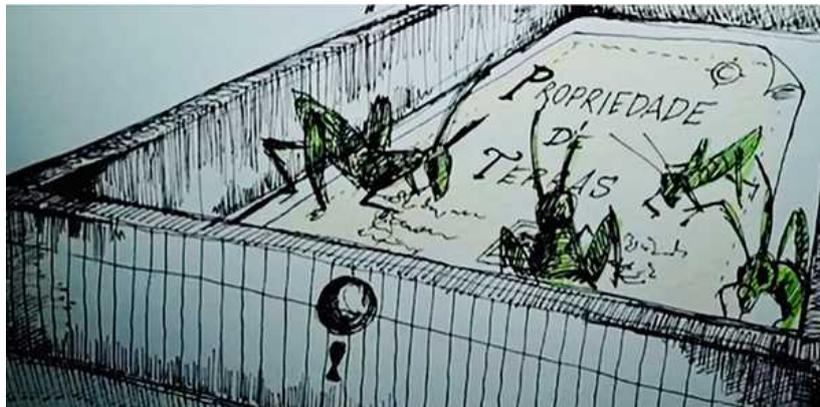
**** Todos los nombres de este artículo se han mantenido en el anonimato por razones de seguridad.**

(1) Plantation patriarchy and structural violence: Women workers in Sri Lanka, file:///Users/Usuario/Downloads/Metis_193809.pdf

(2) Boletín 236 del WRM, 2018, Mujeres y plantaciones: cuando la violencia se vuelve invisible; <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/nuestro-punto-de-vista/mujeres-y-plantaciones-cuando-la-violencia-se-vuelve-invisible/>

Romper el silencio: hostigamiento, violencia sexual y abuso contra mujeres dentro y alrededor de plantaciones de caucho y palma aceitera, 2019; <https://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/romper-el-silencion-hostigamiento-violencia-sexual-y-abuso-contra-mujeres-dentro-y-alrededor-de-plantaciones-de-caucho-y-palma-aceitera/>

El robo organizado de tierras para plantaciones industriales de árboles en Brasil: el caso de AMCEL



El término "grilagem" proviene de provocar el envejecimiento forzado de papeles. Se coloca escrituras falsas dentro de una caja con grillos, con el fin de que los documentos se pongan amarillos (por excrementos de insectos) y ruidos, dándoles un aspecto antiguo y, en consecuencia, más creíbles. Ilustración: Unisinos

Una de las supuestas soluciones señaladas por el gobierno de Bolsonaro para salir de la crisis de deforestación es la regularización territorial. Pero las organizaciones brasileras que trabajan en defensa de los pequeños agricultores y las comunidades tradicionales, como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), alertan sobre el riesgo de que esta regularización legalice el acaparamiento de tierras públicas (conocida como "grilagem" en portugués). Un ejemplo emblemático de apropiación de tierras en la Amazonia brasileras es el caso de la empresa Amapá Celulose S.A. (AMCEL).

El *grilagem* es la elaboración ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles una apariencia legal. Esta actividad ya comenzó a practicarse en la época colonial, con el robo de tierras de los pueblos indígenas, y continúa siendo ampliamente utilizada hasta el día de hoy por los representantes de los intereses del gran capital, como los hacendados, las empresas del agronegocio, la minería y los monocultivos de árboles, entre otros. Es un mecanismo que permite apropiarse de las tierras expulsando a los pequeños agricultores, impidiendo que puedan usufructuar su derecho a utilizar la tierra para reproducir sus medios de vida. Una de las estrategias más recientes para legalizar el acaparamiento de tierras, principalmente en la región amazónica brasileras, es el CAR (Catastro Ambiental Rural). Se trata de un mecanismo previsto en el nuevo Código Forestal brasileras para el registro de tierras de manera digital. (1)

El resultado de este proceso histórico de acaparamiento de tierras es que hoy Brasil tiene una de las situaciones más desiguales del mundo en cuanto a la propiedad de tierras: el 1% de los propietarios concentra casi la mitad de toda el área rural de Brasil, mientras que el 50% de las propiedades ocupan apenas el 2.3% de esta área. (2) Otra consecuencia de la invasión de los intereses del capital en el campo mediante el acaparamiento, fue la expulsión muchas veces violenta de los pequeños agricultores. Estos tuvieron que desplazarse hacia las ciudades, donde reside hoy el 85% de la población brasileras, enfrentando más problemas como el desempleo y la violencia urbana. En un proceso inverso, la lucha del MST (el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) y otras organizaciones, logró que Brasil iniciara, al menos tímidamente, un proceso de reforma agraria.

El acaparamiento de tierras en Brasil un ejemplo perfecto de crimen organizado, de robo de tierras y bosques a los pequeños agricultores, con la participación de un conjunto de actores que se benefician de alguna forma del crimen. En primer lugar, organismos del gobierno que estimulan la ocupación del territorio para determinados proyectos a cualquier costo, y que están dispuestos a violar la propia ley y, además, a brindar un apoyo financiero importante a empresas y hacendados mediante sus bancos de desarrollo. En segundo lugar, las empresas o los hacendados que acaparan las tierras. Además, están los dueños de los estudios notariales que elaboran escrituras de tierras fraudulentas, así como los jueces que deciden no mirar los fraudes, y que muchas veces son también propietarios de tierras con títulos ilegales. Por último, existen otros financistas privados, como los fondos de inversión nacionales e internacionales que invierten en las actividades de las empresas, y hacendados que hacen uso de las tierras acaparadas.

Hay aún más actores que colaboran con el crimen, como el caso del sistema de certificación internacional de la madera (el FSC) para las empresas de plantaciones de árboles. Las empresas de consultoría que realizan la certificación han sido verdaderas “abogadas defensoras” de las empresas acaparadoras de tierras, al declarar que la madera se obtiene mediante prácticas “socialmente justas”. (3)

Amapá Celulose (AMCEL) es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles localizada en la Amazonia, una de las regiones más conflictivas en términos de acaparamiento de tierras en Brasil. AMCEL tiene plantaciones de eucaliptos certificadas por el FSC, utilizadas para producir y exportar astillas de madera para la industria de la celulosa y también como materia prima para la producción de energía/electricidad en Dinamarca.

AMCEL fue creada en 1976 por una empresa minera, CAEMI, pasando después por las manos de las norteamericanas Champion e International Paper. Desde 2007, AMCEL es controlada por los grupos japoneses NipponPaper Industries y NYK (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha). (4)

El WRM conversó con el padre Sisto Magro, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en Amapá, sobre el acaparamiento de tierras de la empresa AMCEL.

Pregunta: ¿Podría hacer un breve resumen histórico de la ocupación de tierras por parte de los pequeños agricultores y los problemas que han enfrentado en el estado de Amapá?

Padre Sisto: La historia de los pequeños agricultores en el estado de Amapá comenzó por vía fluvial. Ocupaban las orillas de los ríos y del océano, en el llamado archipiélago de Bailique, que une el río Amazonas, parte del océano y arroyos. Esas poblaciones vivían de la caza, la pesca, la recolección de frutos de açai y bacaba, y la agricultura de subsistencia, sobre todo en base a la harina de mandioca. Estos ocupantes también criaban ganado y búfalos en las áreas inundadas. Es así como comenzó la historia del pueblo agrícola de Amapá, además de los pueblos indígenas que ya estaban en este territorio. Los agricultores tenían una cultura de subsistencia, sin perseguir la riqueza; no tenían cercos y respetaban el terreno del vecino. Cuando se abrieron los caminos, otras comunidades de pequeños agricultores se fueron creando a lo largo de estos.

A partir de los años 1950, llegaron los grandes proyectos a la zona en un intento por unir Amapá al resto de Brasil y el mundo. Primero llegó el proyecto minero llamado Icomi, y a partir de los años 1970 el proyecto de Amapá Celulose y también un puerto para exportación. Llegó mucha gente de fuera para trabajar en estos proyectos, y también llegó otra lógica; una que busca transformar al pequeño agricultor en emprendedor, tratando de introducir una agricultura “moderna” para “desarrollar” el estado. Eso significa transformar la cultura de subsistencia de estos agricultores en una cultura capitalista, basada en el dinero. Ese intento no dio resultado porque es muy diferente de la cultura recolectora y de subsistencia del pueblo del campo.

Para entender los actuales conflictos por la tierra es importante recordar que, alrededor de 1900, cuando Amapá era parte del estado vecino de Pará, el gobierno de Pará enviaba coroneles a quienes había otorgado títulos de propiedad de grandes extensiones de tierra mediante estudios notariales -cuyos dueños a veces eran los propios coroneles- con el objetivo de que ellos pudieran distribuir esas tierras entre ganaderos y pequeños agricultores. Esa reforma agraria no funcionó, pero generó una serie de antiguos documentos de tierras de 1900, 1910, 1920. Hoy, aunque esos documentos ya están obsoletos, son utilizados por los latifundistas para intentar quitarle las tierras a los pequeños agricultores.

Incluso ahora se está intentando traer personal del Sur [de Brasil] que ya tiene otra visión de la agricultura, del campo, de producir riquezas para exportación y aumentar el PIB (Producto Interno Bruto). Nuestro agricultor no está preocupado por aumentar el PIB de nadie, sino por producir para poder alimentarse y a lo sumo llevar la producción al mercado de Macapá (ciudad principal del estado). Él es más humilde y la Amazonia requiere esa humildad. Cuanto más se intenta implantar una mentalidad capitalista en la Amazonia, basada en la producción y la riqueza, más se destruye este bioma importante, este ecosistema importante. Y nuestro agricultor amapaense sabe muy bien esto. Ahora, quien parece no entender es el gran capitalista que se entrega a la cultura del dinero y que no es de aquí.

Pregunta: Según los informes de certificación FSC de la empresa, (5) AMCEL consiguió apropiarse de casi 400 mil hectáreas de tierras en Amapá. Cerca de 167 mil hectáreas están certificadas y sus títulos, según el FSC, fueron reconocidos por el INCRA (órgano federal del ordenamiento territorial, responsable de la reforma agraria). Otras 119 mil hectáreas no están certificadas y, según la empresa, hay ocupaciones “ilegales” por parte de pequeños agricultores. En 2005, la empresa habría devuelto al INCRA otras 105 mil hectáreas. ¿Cuál es la visión de la CPT sobre la legalidad de las tierras de AMCEL y del proceso de adquisición de estas tierras?

Padre Sisto: Primero es importante decir que el proyecto de AMCEL es un proyecto del propio gobierno federal. Este, en un intento por modernizar el campo, promovió la distribución de tierras públicas en el estado de Amapá y en otros estados de la Amazonia, simulando que fuese una distribución justa de tierras. El gobierno realizó una licitación de tierras sobre un área en Amapá de mucho interés para AMCEL, que hoy abarca parte de los municipios de Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias de Araguay e Itabaul. Cada empresa podía presentarse, pero solo para un único lote. AMCEL pertenecía al grupo CAEMI, una minera poderosa del estado de Amapá. CAEMI participó con seis firmas, algunas de las cuales eran empresas fantasmas, porque nunca se tuvo noticias de ellas en Amapá. Una de las seis era AMCEL, pero las otras no tenían nada que ver con plantaciones para madera, sino que estaban vinculadas al sector minero. Todas ellas participaron y ganaron la licitación

de un lote enorme, de 20 a 25 mil hectáreas. El contrato de la licitación dice que cada empresa debía explotar ese lote. Sin embargo, inmediatamente después de que las otras empresas obtuvieron las tierras, las arrendaron, sin excepción, a AMCEL, a pesar de que el contrato de licitación no lo permitía. Fue así como AMCEL comenzó su proyecto de plantación de árboles, que a un inicio era con pinos.

Uno de los elementos del contrato de licitación decía que la empresa debía hacer un estudio topográfico y demarcar el área. Todas las empresas que ganaron la licitación hicieron eso, pero cometieron otra irregularidad: aumentaron aún más las áreas. Por ejemplo, terrenos que eran de 20 mil hectáreas pasaron a ser de 27 mil hectáreas después de la demarcación. Otro elemento de los términos de la licitación era que la empresa ganadora debía excluir del área a ser demarcada las zonas donde hubiese pobladores, pequeños agricultores. Pero estas empresas no hicieron eso. Por el contrario, AMCEL comenzó a promover auténticos desalojos de las personas que vivían en esas zonas. La mayoría fue expulsada a inicios de los años 1980. En algunos casos AMCEL indemnizó al pequeño agricultor por la tierra, algo que tampoco estaba permitido porque el contrato mandaba excluir esas zonas habitadas y nada más. Pero nada de eso sucedió. Después, entre 1983 y 1985, el INCRA le concedió los títulos a AMCEL y a las otras cinco empresas que ganaron la licitación, aunque hubiera gran cantidad de agricultores en esas tierras. Luego, las otras empresas le vendieron las tierras a AMCEL. Si esto está bien para AMCEL, para mí es un gran fraude, porque AMCEL y las otras empresas actuaron de forma conjunta, e incumplieron los términos de la licitación.

Hoy quedan pocos habitantes porque la mayoría ya fue expulsada. Pero es interesante que AMCEL diga que no hay conflictos en las 167 mil hectáreas, que el conflicto estaría en las otras 119 mil hectáreas. Porque también hay conflictos en el área certificada [por el FSC], y la prueba de esto es que están en la Justicia. Es fácil ver en el sitio web del Tribunal de Justicia de Amapá los conflictos existentes sobre las áreas que la empresa dice que son legalmente suyas. Los habitantes que aún resisten allí han sido y están siendo expulsados judicialmente porque AMCEL muestra los títulos de las empresas que ganaron la licitación, y que ahora forman parte de un único gran título de 167 mil hectáreas. Cabe agregar que en el extremo norte del territorio, en el municipio de Ferreira Gomes, la empresa ya excedió el área del título unificado que obtuvo. Así quedó comprobado en un informe técnico realizado por el INCRA a pedido del juez, durante uno de los procesos judiciales. Pero el juez dice que solo se excedía un “poquito”, sin embargo, ese límite tenía 28 km de extensión, por lo que cualquier pequeña variación termina siendo una diferencia muy grande.

Pregunta: AMCEL afirma que en 2000/2001 hubo una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de las tierras públicas en la Cámara Federal, en Brasilia, que concluyó que el proceso de adquisición de tierras por parte de AMCEL era legal. ¿Usted concuerda con esta afirmación?

Padre Sisto: ¿Cómo es posible entonces que, en 2005, luego de otra CPI en 2004 sobre las tierras públicas, pero esta vez dirigida por la Asamblea Legislativa del estado de Amapá, AMCEL haya tenido que devolver 105 mil hectáreas a la Unión [gobierno federal]? Es una contradicción gigantesca. El informe de la CPI de 2004 casi fue redactado por una persona que más tarde fue procesada y condenada por acaparamiento de tierras. Felizmente fue posible nombrar a otro diputado, Ruy Schmidt, que no estaba vinculado con el acaparamiento de tierras. Esa CPI tuvo una participación fundamental de la CPT y consiguió revelar todo el proceso fraudulento de acaparamiento de tierras de AMCEL. Tenemos toda

esa documentación guardada y, como resultado, AMCEL tuvo que entregar 105 mil hectáreas del otro lado del Río Araguari. En realidad, estas tierras no tenían ni un documento, ¡ni un solo título! Eran apenas documentos de posesión, recibos de compraventa, un documento cualquiera de bienes raíces.

Por otro lado, en relación a la situación de las tierras de AMCEL, la empresa tiene un área relativamente pequeña con títulos definitivos, tierras compradas a personas que poseían esos títulos y son títulos reconocidos por el INCRA, que no pueden ser cuestionados. Sin embargo, el resto son tierras que resultan de otro proceso criminal: la llamada apropiación notarial. Fueron notarios del distrito de Amapá y del municipio de Tartarugalzinho. Esos dos notarios entregaron escrituras públicas, inscritas en el notario público, de terrenos que en realidad son tierras públicas que el INCRA nunca tituló, vendió, ni logró regularizar. Si usted va al INCRA y ellos miran el mapa que tienen de estas áreas, dirán que esas tierras son suyas, que aún pertenecen a la Unión [gobierno federal]. Por eso, son áreas cuya supuesta legalidad, tal como afirma AMCEL, cuestionamos desde la CPT. Son áreas inscritas, pero de forma irregular, ilegal, y son en total más de 100 mil hectáreas. Son tierras que deberían también ser devueltas a la Unión. En 2003, un Juez de Paz y un Corregidor de la Justicia pidieron a los estudios notariales de Amapá que corrigieran esos registros fraudulentos, incluyendo a los que registraron las tierras donde está AMCEL. Pero nada sucedió después, y los jueces del caso argumentan que la Procuraduría General de la Unión (AGU por sus siglas en portugués) debe iniciar una acción judicial para recuperar estas áreas y poder crear asentamientos bajo la reforma agraria. Pero la AGU no lo hace. Hoy en día, una táctica de AMCEL para deshacerse de estas tierras es negociar esos títulos ilegales con la agroindustria de la soja.

Pregunta: ¿Quién financió a AMCEL, incluso con todo el acaparamiento de tierras?

Padre Sisto: El FNO (Fondo Constitucional de Financiamiento del Norte), dinero público brasilero, financió buena parte de las plantaciones de AMCEL. Es dinero que también debería financiar a pequeños agricultores, pero ellos no tienen acceso a estos fondos porque carecen de condiciones para formular y presentar un proyecto. Son AMCEL y otras empresas y hacendados asociados al agronegocio de la soja, por ejemplo, los que desarrollan proyectos y acceden al dinero.

Pregunta: la empresa afirma que está “comprometida” a resolver los conflictos con los pequeños agricultores mediante el “diálogo”. ¿Cómo evalúa la relación de la empresa con los habitantes?

Padre Sisto: La relación no es respetuosa. AMCEL derriba las casas de los habitantes. El año pasado se derribaron cinco casas en el municipio de Ferreira Gomes, este año derribaron otra en el municipio de Tartarugalzinho, con protección del juez para aquella zona, porque ganaron un juicio contra un pequeño productor. Solo que esta casa estaba en el medio del campo. ¿Y qué hizo AMCEL? El funcionario judicial se presentó en el lugar, AMCEL señaló la casa, ¡y el funcionario ordenó derribar la casa del hermano de este habitante, que queda sobre la calle y que no era parte del proceso! Esto parece indicar que la empresa busca ampliar aún más su territorio, incluso porque perdió varias causas contra los habitantes. Yo pregunto: ¿Por qué AMCEL, habiendo perdido varios juicios, aún mantiene las 167 mil hectáreas? Probablemente esté intentando recuperar las áreas que perdió legalmente en la justicia. Y el juez de Tartarugalzinho, ante el pedido de indemnización por parte del agricultor, en lugar de pedir a AMCEL que reconstruya

inmediatamente la casa, dijo que iniciará un proceso judicial y que la primera audiencia será el año que viene. Ante esta situación, el agricultor se siente intimidado para volver a construir su casa porque la empresa ya la derribó una vez y tiene miedo de que el juez ordene derribarla nuevamente.

Pregunta: Aunque algunos habitantes ganaran juicios, en la mayoría de los casos AMCEL salió victoriosa. ¿Podemos esperar justicia del poder judicial de Amapá?

Padre Sisto: No. Por ejemplo, en el caso de las cinco casas que fueron derribadas en el municipio de Ferreira Gomes, el propio juez estuvo presente en el momento del derrumbe. Según el relato de los habitantes que se encontraban allí, él dijo “quiero ver esas casas en el suelo”. El juez de Tartarugalzinho es aún peor. Ante el derrumbe de casas de manera irregular, además de no reconocer el error, pasó el tema por alto diciendo que en febrero/marzo [de 2021] se conversaría sobre eso. Pero ya dejó claro que no va a suceder absolutamente nada con AMCEL. Este mismo juez ocupa una tierra pública. Con jueces de estado a los que siempre recurre AMCEL para expulsar a los habitantes, es muy difícil que haya una decisión favorable para los pequeños agricultores.

Pregunta: Considerando que la CPT actúa desde una perspectiva de justicia social, ¿cuál es el camino a tomar para resolver el conflicto de tierras creado por AMCEL a partir de la década del 1970? ¿Y cuál es su mensaje para el pueblo de Dinamarca, país al que AMCEL envía astillas de madera certificada por el FSC?

Padre Sisto: La Justicia Federal debería intervenir y dar instrucciones a los jueces del estado de Amapá, para que no tomen más decisiones. Si la Justicia Federal se involucra es diferente, pues esta tiende mucho más a analizar el derecho de propiedad sobre el área, y si se trata de un territorio de AMCEL o no. Esta evaluará los títulos de propiedad para ver si se trata de una tierra pública, y en caso de que así sea, aún tratándose apenas de un milímetro de tierra pública, AMCEL tendrá que devolver las tierras de las que se apropió. Los jueces del estado, por el contrario, tienden a afirmar que las tierras son del estado de Amapá y no de la Unión. Varios jueces del estado incluso participaron en el proyecto de agronegocio. Algunos ya estuvieron en programas de radio con representantes del agronegocio. Hay también jueces federales que favorecen el agronegocio, pero sus decisiones tienden a ser más equilibradas. Es por eso que AMCEL siempre busca el camino de la justicia estatal, nunca el de la federal.

En este momento hay un proceso complicado en curso en el estado de Amapá. Se están transfiriendo tierras de la Unión para el estado de Amapá, y este quiere regularizarlas para entregarlas al agronegocio, no a los pequeños agricultores. Al mismo tiempo, el gobierno de Bolsonaro no libera ni un centavo para el INCRA, exactamente para no tener que hacer nada. Vivimos un momento muy difícil en el que no hay voluntad política para hacer una regularización territorial en beneficio del pequeño agricultor.

A los ciudadanos daneses les diría que es hora de que planten árboles en Dinamarca, y que cosechen esos árboles, en lugar de cosechar árboles aquí. Aquí estamos ya en un proceso gravísimo de deforestación, devastación y destrucción, promovido por el gobierno de Bolsonaro. Él se fortalece cuando puede decir que estamos exportando madera a Dinamarca porque ellos nos la piden. Mientras tanto, está jugando con fuego, incentivando la quema y destrucción del bosque para dar lugar a la cría de ganado, a la soja y al agronegocio. Y la madera puede ser una buena excusa para poder hacerlo. Ya es más que

hora de que los países europeos planten la madera que ellos mismos destruyeron en el pasado, replanten [en Europa] y utilicen su propia madera y no la madera de la Amazonia, ya que esto hace que haya más personas desalojadas y que se cometan más crímenes ambientales.

(1) GRAIN, Legalización del gran robo de tierras públicas en Brasil: agronegocio, deforestación y el caldero de futuras pandemias, abril de 2020, <https://www.grain.org/es/article/6460-legalizacion-del-gran-robo-de-tierras-publicas-en-brasil-agronegocio-deforestacion-y-el-caldero-de-futuras-pandemias>

(2) OXFAM Brasil, Tierras y desigualdad, <https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/terras-e-desigualdade/>

(3) Boletín 240 del WRM, El FSC y la RSPO, ¿cómplices del delito? La cuestión de tierras de Jari Florestal y Agropalma en la Amazonía brasileña, 2018, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/el-fsc-y-la-rspo-complices-del-delito-la-cuestion-de-tierras-de-jari-florestal-y-agropalma-en-la-amazonia-brasilena/>

(4) AMCEL - Amapá Florestal e Celulose S.A., <http://www.amcel.com.br/#home/>

(5) Amcel, Informe de evaluación para la certificación del manejo forestal y de la cadena de custodia, desde el bosque hasta la salida del producto, <http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000t1ht2EAA>

Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”



Foto: Frans Ari Prasetyo

[Disponible en indonesio. Indonesia : Legalisasi Kejahatan di balik slogan ‘Penciptaan Lapangan Kerja’.](#)

Con la adopción en octubre de 2020 de la llamada Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, el gobierno de Indonesia modificó más de 75 leyes. Se espera que el mayor impacto de este cambio sea sobre el medio ambiente, sobre los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, así como sobre los derechos de los trabajadores. Esta Ley modifica (y desreglamenta) los procesos de autorización y planificación del uso del suelo para las actividades comerciales de las empresas. La Ley también otorga mayor poder al gobierno central y al sector empresarial, en especial la industria del carbón, que se beneficia directamente de un conjunto de incentivos. Por ejemplo, la Ley exige a las compañías de extracción de carbón de pagar regalías si construyen instalaciones aguas abajo, tales como centrales eléctricas a carbón.

Esto es especialmente problemático en Indonesia. Un artículo reciente del boletín del WRM (1) menciona cómo el presidente Widodo y su familia, el vicepresidente y otros colaboradores cercanos están involucrados en la industria de la minería del carbón. Además, 262 de los 575 parlamentarios de Indonesia son empleados, propietarios,

accionistas o directores ejecutivos de algunas de las industrias extractivas y empresas comerciales más importantes del país. Fuertes señales de que las empresas se han apoderado efectivamente del aparato del gobierno central. En este contexto, es fundamental destacar otra característica clave de la Ley Ómnibus: el gobierno central revoca el derecho de los gobiernos regionales a vetar proyectos de inversión ya aprobados por Yakarta (la capital donde reside el gobierno central). Esto aumentará los conflictos entre las dinastías locales existentes y la élite política de Yakarta. (2)

Al mismo tiempo, la Ley limita (y, en algunos casos, incluso elimina) la posibilidad de que la sociedad civil y las comunidades afectadas consulten o impugnen la aprobación de proyectos tales como grandes minas o plantaciones industriales. También limita el derecho de la sociedad a presentar objeciones contra las evaluaciones de impacto ambiental una vez aprobadas, incluso cuando se pueda demostrar que el proyecto aprobado causará daños ecológicos y sociales.

El Ministro de Medio Ambiente de Indonesia argumentó que esta limitación “se basa en las conclusiones de que los intereses de las comunidades locales directamente afectadas, con frecuencia se han visto diluidos por intereses externos indirectos”. Del mismo modo, un legislador del comité legislativo del parlamento que aprobó la Ley, dijo que es necesario limitar las críticas de quienes no están directamente afectados si “no están en línea con los intereses nacionales”. (3) Estas declaraciones son muy problemáticas. Las comunidades afectadas rara vez son informadas de manera oportuna y adecuada, dándose cuenta del alcance de los impactos muchas veces recién cuando la maquinaria o los agentes de seguridad aparecen en sus territorios. Pero además, ¿cuáles son esos “intereses nacionales” de los que hablan los representantes del gobierno? ¿Los intereses de quiénes?

Desde que salió a la luz esta propuesta, miles de trabajadores salieron a las calles a rechazar la Ley Ómnibus, y cientos de manifestantes fueron detenidos. Los derechos de los trabajadores ha sido arrebatados, en particular los derechos destinados a proteger a las mujeres, quienes son más vulnerables a ser subyugadas y explotadas. (4) Mucho se ha escrito sobre los peligros y riesgos de la Ley Ómnibus, incluso por parte de empresas comerciales a las que les preocupa perder imagen como resultado de la implementación de la ley.

No obstante, pocos materiales incluyen voces de activistas comunitarios que hablen de las posibles consecuencias de la Ley en sus territorios y sus vidas. Es por eso que el WRM se puso en contacto con un aliado cercano de Indonesia, quien dialogó con seis activistas locales que han resistido, algunos desde hace décadas, varias inversiones nocivas a lo largo de las islas. Cada una de estas personas creció siendo testigo de cómo su isla, sus bosques, ríos, aguas costeras, animales que les proveen de proteínas, aire fresco, fueron destruidos e incautados, a lo que le siguieron actos de agresión por parte del gobierno y/o de proyectos de inversión de las empresas. “Para cada una”, dijo nuestro aliado indonesio, “la historia y el trabajo preliminar del que forman parte son profundamente personales. A pesar del tono decidido de sus voces, los diálogos estuvieron marcados por una notable ausencia de jovialidad, algo muy extraño en las culturas orales locales en Indonesia. Es un reflejo de lo oscuro que está su estado interior en este momento”.

Éstas son sus historias.

Todos los nombres se mantienen en el anonimato por razones de seguridad.

“Mama Na” en lucha contra las plantaciones industriales de palma aceitera y madera

Mama Na pertenece a la tribu Muyu. Vive en Kampung Subur, regencia de Boven Digul, Papua. Entre 2013 y 2014, PT BCA (PT Berkat Cipta Abadi), una subsidiaria del conglomerado coreano de aceite de palma y madera Korindo Group, destruyó al menos 12.300 hectáreas de bosque. El Grupo Korindo es la empresa de plantaciones de palma aceitera más grande de Papúa. La empresa de plantaciones de palma aceitera PT MRJ (PT Merauke Rayon Jaya), que abastece a multinacionales como Mars, Nestlé, PepsiCo y Unilever (5), también es una amenaza para los bosques y la tierra de Mama Na. Además, la tierra de su comunidad está amenazada por plantaciones industriales de madera.

La empresa de madera contrachapada se estableció por primera vez en 1990 y ha cambiado de propietario tres veces. Solía extraer madera, pero como ya casi no queda bosque, la empresa ahora planta palmas aceiteras, con el objetivo de expandirse a otras partes de esta tierra. Posteriormente, la empresa se unió a una compañía de plantaciones para madera [una categoría conocida en Indonesia como HTI] y cambió su nombre para que pudiera calificar para las plantaciones. En Kampung Subur, la empresa de plantaciones de palma aceitera PT BCA ha entrado en los territorios de los clanes Toweb, Tomba y Burok. Nunca entraron en mi tierra. Yo me opongo, porque perdería mi tierra y mi sustento. Ya he visto los impactos.

El agua está contaminada. Hay peces muertos por todo el río Bian y Digul. Cuando llegaron a la zona, construyeron un hospital, el Hospital Korindo. Es literalmente una “casa de enfermos” (en indonesio, Rumah Sakit, significa “casa de enfermos”) ya que la empresa vino a enfermarnos. El daño se hunde bajo tierra, hasta el agua. Entonces los peces mueren. Cuando usamos el agua para cocinar, la olla está aceitosa. Desde que entró la empresa sentimos que perdimos nuestra cultura. Ya no tenemos nuestras tradiciones. Por ejemplo, perdimos nuestras habilidades artesanales, como hacer noken, enok, nyiru ayak, que se hacen con caña y bambú.

Ahora estoy preparada y alerta para enfrentarme a la empresa de plantaciones de palma aceitera PT MRJ y a otras empresas de plantaciones industriales de madera. La gente de la empresa está poniendo sus ojos en la tierra del clan Ikoké para construir un depósito de troncos. Vienen y dicen que están allí con fines turísticos o de conservación, engañando a la comunidad.

Alguien de PT MRJ vino ayer y dijo en el salón comunal: “Los haremos prosperar. Construiremos obras, proporcionaremos agua potable, buenos trabajos, haremos esto y aquello para la comunidad”. Pero resultó que la gente dijo NO a todo eso, porque ya habían percibido cuál era la situación real. Los engaños de la empresa quedaron al descubierto. De modo que ya no aceptamos a los que quieren persuadirnos. Y ahora sufrimos más por eso.

Todos dependemos de los bosques para alimentarnos y, sin embargo, vemos cómo destruyeron los bosques. Nos negamos a eso, porque queremos poder utilizar el bosque que queda, protegerlo y cuidarlo. De lo contrario, ¿adónde irían mis hijos y nietos en el futuro?

Tengo seis hijos y todos dicen que Mama Na es como una guerrera para ellos. Todos ellos son un solo corazón con Mama Na. Nuestra vida no es fácil. No somos obstinados ni arrogantes. Ellos son ricos y nunca nos trajeron bienestar a nosotros. Ya no hay tiempo.

Ey en lucha contra la devastación causada por una empresa minera

Ey es oriunda del pueblo Aramsolki, en el distrito de Agimuga, regencia de Mimika. Ey es muy activa en la creación de un espacio para que los miembros de las comunidades de tres distritos expresen sus quejas por la devastación total de los ríos y estuarios de la zona. Esta elevada contaminación y destrucción es el resultado de la descarga masiva y directa de relaves (desechos de la minería) en ríos y vías fluviales por parte de la empresa minera PT Freeport Indonesia. Freeport Indonesia opera una de las minas de cobre y oro más grandes del mundo en Papua. (6)

Las personas que viven a orillas de los ríos y junto al mar tienen una cultura de caza y dependen del mar o del río. Esta irresponsable eliminación de los desechos destruye la vida de las personas. Los animales van muriendo lentamente ya que todos los días inhalan y consumen agua contaminada por el lodo de los relaves de la mina. También observamos que numerosas personas sufren comezón y otros problemas de salud.

Los relaves de Freeport también son la causa de que la comunidad pierda acceso al transporte fluvial. La sedimentación de los desechos en el río Ajikwa / Wanogong provocó una sedimentación extraordinaria a lo largo del río Sampan, la isla Puriri y Kampung Pasir Hitam, hacia el estuario. Anteriormente, los miembros de la comunidad utilizaban esta ruta para cruzar las islas o para ir a la ciudad a encontrarse con familiares, vender sus cosechas o intercambiar productos de la caza o la cosecha, y también ha sido una ruta para que los niños accedan a la educación. Hoy en día la gente tiene que esperar a que el agua del río suba lo suficiente para poder pasar los botes o canoas. A veces, la gente espera cinco horas y, a veces, incluso un día y una noche. En ocasiones, personas desesperadas empujan sus botes sobre el río cubierto de desechos, lo que ocasiona numerosos daños a sus botes. Otros optan por cruzar por alta mar, lo cual es muy peligroso.

Perdimos un pueblo: Kampung Pasir Hitam. Y también cinco ríos: el río Yamaima, Ajikwa / Wanogong, Sampan, Ajiira y Manarjawe. Tenemos un problema muy grave.

Curiosamente, en el medio de un río poco profundo que se ha secado, Freeport está plantando árboles. Esto nos enoja mucho. La empresa dice que está reforestando, ¡pero nadie sabe que allí desapareció un río! La empresa planta árboles y también elimina la evidencia.

Ni lucha contra un proyecto de energía geotérmica

Ni proviene de Jailolo, en la isla de Halmahera, Maluku Norte. Jailolo es un grupo de pueblos en un terreno propenso a terremotos, que bordea una franja de bosques. También es el nombre de un volcán que recientemente se reactivó. Durante la última década se han repetido fuertes terremotos todos los años. Desde 2008, PT Star Energy Geothermal Company, una subsidiaria de PT Barito Pacific Tbk, obtuvo la concesión del campo geotérmico Jailolo y comenzó la exploración en las 12.960 hectáreas. La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) otorgó una subvención de 733.000

dólares a PT Star Energy Geothermal Halmahera para realizar un estudio de factibilidad para el proyecto. (7) En 2017, sin embargo, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales retomó la concesión de Star Energy y, a partir de entonces, las actividades de exploración han sido realizadas por PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), una empresa conjunta del Ministerio de Finanzas, Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo. A principios de 2020, el gobierno dio un fuerte respaldo a esta inversión.

En mi opinión, la mayor amenaza en Jailolo es el gobierno, porque al gobierno no le importa y quiere unirse a la empresa geotérmica. Star Energy comenzó a entrar en 2008, recolectando información. Aún no hay obras ni construcción. Pero el temor es que la mayoría de las personas de Jailolo son pescadores o agricultores. Por ejemplo, hay una aldea, la aldea de Saria, donde la pesca es el principal medio de vida y la gente cultiva al lado. Hay pueblos que todavía dependen del bosque, como es el caso de los pueblos de Payo, Pateng, Bobo, Bobo Joko e Idamdehe. Hay planes de que Idamdehe se convierta en un lugar donde perforar un pozo geotérmico.

Nuestro bosque todavía está muy sano y no dejaremos que el proyecto geotérmico lo destruya. Nunca recibimos información adecuada sobre este proyecto de construcción de una planta de energía. La nueva Ley Ómnibus, sin duda, tendrá un impacto enorme. Invadirán la tierra. Quienes son pescadores y agricultores perderán sus medios de vida. Con esta nueva Ley, el gobierno está ayudando a la empresa. Pero los pueblos tienen una fuerte unidad, especialmente los pueblos indígenas de Saria e Idamdehe.

Na en lucha contra una mina de níquel

Na es del sureste de Sulawesi, donde resisten la extracción de níquel. (8) La comunidad bloqueó con éxito las actividades mineras en 2019 e hizo retroceder el equipo pesado hasta el campamento del proyecto, en la costa. Na ha estado al frente de la resistencia.

Para la comunidad, la minería no hace ningún bien. Nada. Si la minería llegara aquí, sería peligroso. En primer lugar, ¡nuestras plantas no darían frutos a causa del polvo! Aquí hay cocos, guayabas, clavo, nuez moscada y pimienta. En segundo lugar, el agua. En tercer lugar, ¿a dónde irían los desechos? ¿Al océano? ¡Pero éste es un pueblo de pescadores! Quienes pescan, obviamente, no podrían hacerlo. Entonces, para nosotros, la minería no es buena. Tiene impactos enormes; los hemos visto. La minería es solo por un momento. En un abrir y cerrar de ojos, el dinero se habrá ido. Es solo por un momento porque todo es mentira. Y de hecho, se trata de dinero. Estamos tan traumatizados por esta minería. Debemos estar atentos, especialmente para no rendirnos. Eso es todo.

Pero todas las tierras alrededor del sitio minero están afectadas. Desde la tierra de mis padres hasta la mía, todo está afectado. Por ejemplo, en la vía de acceso, donde los vehículos van y vienen, hay polvo por todas partes. Tenemos que lavar las hojas de plátano antes de usarlas. Además, con la mina, la familia se ha fracturado. Los impactos son obvios, pero no se dieron cuenta. Ya existe este efecto. Anteriormente, una barra de pescado costaba diez mil rupias indonesias, ahora subirá a cincuenta mil. ¿Quién puede pagar ese precio? Y además ya no podemos ir a pescar.

Ahora, la nueva Ley quiere facilitar las licencias a las grandes empresas, pero nosotros defendemos nuestros derechos. La base de mi vida está en mi tierra. Si hay cultivos, hay esperanza. Tenemos nuestras plantas ahí. Podemos ganar algo de dinero con nuestras cosechas. Sin mi tierra no puedo soñar con mis hijos y mis nietos. La mina es tan penosa

para nosotros. Todo está siendo destruido. Lloraremos sangre después. ¡Pero nunca! nunca renunciaré a la tierra.

Yati Dahlia en lucha contra los planes de una nueva capital

Dahlia proviene de Penajam Paser Utara, Kalimantan Oriental. Dahlia es una activista y una artista tradicional perteneciente a la tribu Balik, una pequeña tribu ubicada en el corazón de donde hay planes de construir la nueva ciudad capital de Indonesia, y cerca de una de las regiones mineras más grandes. Hay aproximadamente 5.000 personas Balik que también hablan su propio idioma.

No queremos hacer diferencias entre las tribus. Aquí están los Balik, los Paser y los Dayaks. Pero con este enorme proyecto, sentimos que nos están tendiendo una trampa. Quieren que entreguemos la tierra ... Luego nos piden una fotocopia de nuestro DNI. La razón principal es que quieren dividir la tierra. Algunos ambicionan convertirse en líderes tradicionales o lo que sea ... Realmente, estamos perturbados. ¿Cómo podemos estar unidos si seguimos siendo utilizados por personas que solo se preocupan por sí mismas?

Leímos sobre esta nueva Ley. Pero ésta es la tierra de nuestros antepasados. Estamos muy inquietos y angustiados. El gobierno no se detendrá hasta que nos convenza de vender nuestra tierra. Nos dice: "Cooperemos". Le he dicho a mi familia y amigos, dueños de la tierra aquí, que nuestros antepasados no cierran los ojos y nos miran desde arriba. Aunque la tribu Balik es una minoría, debemos vivir en unidad para defender la tierra.

Ah en lucha contra un proyecto de energía geotérmica

Ah es de Salingka Gunung Talang, regencia de Solok, Sumatra Occidental. Ah es una activista comunitaria que pertenece a un movimiento que involucra a cuatro comunidades de las montañas, amenazadas por un proyecto geotérmico dirigido por el consorcio turco PT Hitay Power Energy y PT Dyfco Energi. (9)

Casi todos los residentes al pie del monte Talang, distrito de Solok, son agricultores. Incluso los funcionarios [conocidos como PNS en Indonesia] participan en la agricultura para obtener ingresos adicionales. Estamos orgullosos de nuestros productos vegetales y de nuestro delicioso y famoso arroz, llamado Bareh Solok. En general, fue un lugar seguro hasta 2017, cuando el proyecto de minería geotérmica trastocó nuestras vidas. Incluso entonces, el proyecto no estaba claro. Pero sabíamos que la electricidad que quieren producir no es para la comunidad. No nos beneficiaría. La gente de la empresa se abrió paso a la fuerza. Entonces, comenzaron los arrestos por el incendio de un automóvil de la empresa, aunque no estaba claro quién lo quemó debido a la gran cantidad de personas involucradas. Las personas encarceladas por este incidente estuvieron encerradas desde febrero de 2018 hasta el primer mes de 2020. A pesar de eso, hemos frenado constantemente los intentos de las brigadas de seguridad y las fuerzas armadas de ingresar a nuestra zona.

Por ahora no tenemos noticias de la empresa, y también observamos que no ha habido ningún intento de volver a entrar en nuestro territorio. Pero nos mantenemos alerta. Con la Ley Ómnibus sabemos que existe un gran riesgo para nuestra seguridad si se lleva a cabo el proyecto.

A pesar de la creciente alarma de que las tierras comunitarias y los medios de vida de los pueblos que las habitan se limiten aún más y sean despojados con la aprobación de la Ley Ómnibus, estas historias también revelan cómo las comunidades seguirán resistiendo la destrucción de sus bosques y tierras.

[Disponible en indonesio. Indonesia : Legalisasi Kejahatan di balik slogan ‘Penciptaan Lapangan Kerja’.](#)

- (1) Boletín 252 del WRM, Indonesia: REDD+, el financiamiento europeo para el desarrollo y la ‘economía baja en carbono’, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/indonesia-redd-el-financiamiento-europeo-para-el-desarrollo-y-la-economia-baja-en-carbono/>
- (2) The Interpreter, Indonesia’s Omnibus Law won’t kill corruption, 2020, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-omnibus-law-won-t-kill-corruption>
- (3) Mongabay, Indonesia’s Omnibus Law a ‘Major Problem’ for Environmental protection, 2020, <https://news.mongabay.com/2020/11/indonesia-omnibus-law-global-investor-letter/>
- (4) Business and Human Rights Resource Centre, Omnibus Law on Job Creation reinforcing patriarchal mentality, 2020, <https://www.business-humanrights.org/en/blog/omnibus-law-on-job-creation-reinforcing-patriarchal-mentality/>
- (5) Greenpeace, PT Berkat Cipta Abadi Oil Palm plantation in Papua, 2018, <https://media.greenpeace.org/archive/PT-Berkat-Cipta-Abadi--PT-BCA--Oil-Palm-Plantation-in-Papua-27MZIFJW97GL8.html> ; EJAtlas, Korindo clearing forests for oil palm plantations, Papua, Indonesia, 2020, <https://ejatlas.org/conflict/korindo-clearing-forests-for-oil-palm-plantations-papua-indonesia>
- (6) The Insiders Stories, Freeport Indonesia’s Production Rises 9% in the 2Q of 2020, <https://theinsiderstories.com/freeport-indonesias-production-rises-9-in-the-2q-of-2020/> ; London Mining Network Mimika’s Coastal Dystopia: Besieged by Freeport’s Indonesia’s Mine Tailings Slurry, <https://londonminingnetwork.org/wp-content/uploads/2018/04/Mimikas-Coastal-Dystopia-1.pdf>
- (7) The Jakarta Post, Geothermal Projects expand clean energy, 2010, <https://www.thejakartapost.com/news/2010/03/31/geothermal-projects-expand-clean-energy.html>
- (8) Entre las empresas con permisos para actividad de minería en la isla figuran: PT Alatoma Karya; PT Bumi Konawe Mining; PT Derawan Berjaya Mining; PT Gema Kreasi Perdana; PT Kimco Citra Mandiri; PT Konawe Bakti Pratama; PT Hasta Karya Megacipta; PT Pasir Berjaya Mining; PT Cipta Puri Sejahtera; PT Natanya Mitra Energy; PT Investa Pratama Inti Karya; y PT Kharisman Kreasi Abadi. Ver, Asia Times, Mining permits revoked after Wawonii protests, 2019, www.asiatimes.com/2019/03/article/mining-permits-revoked-after-wawonii-protests/
- (9) Boletín 244 del WRM, Indonesia y la triste verdad detrás de la energía geotérmica: un discurso engañoso de “energía limpia”, 2019, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/indonesia-y-la-triste-verdad-detras-de-la-energia-geotermica-un-discurso-enganoso-de-energia-limpia/>

Leyes, crimen y deforestación en el campo tailandés



Comuneros demandados por traspasar el Parque Nacional Sai Thong en la provincia de Chaiyaphum, el tribunal decide encarcelarlos y les obliga a pagar daños al estado.
Foto: Prachatai

[Disponible en tailandés: กฎหมาย อาชญากรรม และการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ชนบทของไทย](#)

¿Cómo se definen los crímenes forestales? Y ¿quiénes los cometen? Los casos siguientes dan una idea de cómo en los últimos años la ley se ha aplicado en contra de las comunidades tailandesas que habitan los bosques, y cuáles han sido las consecuencias de esto.

Kaeng Krachan

En el Parque Nacional Kaeng Krachan, en la zona occidental del país, funcionarios estatales incendiaron las casas y confiscaron o destruyeron las pertenencias de residentes del grupo étnico Karen. Las comunidades fueron reubicadas en casas cuyas condiciones de vida demostraron ser insostenibles, razón por la cual exigieron que se les permita regresar a sus territorios originales.

Kaeng Krachan es un bosque muy grande a lo largo de la frontera con Birmania, y hace 100 años que ha sido el hogar de las comunidades indígenas Karen. En 2011, el gobierno tailandés propuso que el área natural se convirtiera en un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pero la solicitud no ha sido aprobada. Desde 2011, la intimidación y la violación de los derechos humanos de los residentes locales ha sido frecuente, culminando con la expulsión de 98 familias Karen del bosque.

El abuelo Khaw-Ee Meemi, en ese entonces de 100 años, uno de los que fueron desalojados y fueron testigos de cómo incendiaban sus casas, testificó en 2012 en el tribunal administrativo, en el que fue uno de los demandantes, que “cuando abrí mis ojos por primera vez como bebé recién nacido, el bosque estaba frente a mí. Ése fue el lugar donde bebí mi primera gota de leche.” Khaw-Ee nació en 1911, 30 años antes de que fuera promulgada la primera ley forestal de Tailandia, y 50 años antes de la primera ley de Parques Nacionales..



Pawlajii (“Billy”) Rakjongjaroen, nieto de Khaw-Ee, quien continuó la lucha por los derechos de los Karen en Kaeng Krachan, desapareció en 2014. Cinco años más tarde, el Departamento de Investigaciones Especiales descubrió fragmentos óseos cuyo ADN coincidía con el de Pawlajii en un barril de petróleo debajo de la superficie de un embalse en Kaeng Krachan.

Chaiyaphum

En 2016, Den Khamlae, líder de la comunidad Khok Yao en la lucha por los derechos a la tierra en la provincia de Chaiyaphum, en la región noreste de Tailandia, también desapareció en circunstancias misteriosas. Más tarde se encontraron fragmentos óseos de un cráneo humano en el bosque. El ADN de los fragmentos demostró ser similar al de otros miembros de la familia de Den.



Den había participado en la larga lucha, extendida por todo el noreste, contra el registro oficial de un Bosque de Reserva Nacional en tierra ocupada desde mucho tiempo atrás por pequeños agricultores y contra su confiscación para establecer plantaciones industriales de eucaliptos. Su esposa, Suparb Khamlae, fue encarcelada por apoyar la defensa de la tierra de la comunidad Kok Yao, con el argumento de haber “invadido bosque estatal”.

Desalojo y encarcelamiento

En 2014, cuando el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO, por su sigla en inglés) dio un golpe de estado militar en Tailandia, utilizó sus poderes constitucionales temporales para emitir la Orden NCPO 64/2014, que dio poder a los militares para devolver las tierras de bosque confiscadas e iniciar procedimientos contra las empresas involucradas. Sin embargo, en la práctica fueron los comuneros pobres a los que habían arrebatado sus tierras quienes tuvieron que enfrentar acusaciones penales y civiles. Tan solo un año después de emitida la Orden NCPO 64/2014, gente de todo el país apeló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia porque la Orden estaba siendo utilizada para expulsar a los pobladores de zonas oficiales de bosque, incautar sus tierras y destruir sus pertenencias sin ninguna supervisión o verificación de los hechos.

Entre 2014 y 2019 se presentaron unos 46.600 casos contra pobladores por invasión del bosque. En los tribunales de Chaiyaphum, por ejemplo, utilizando la Ley de Parques Nacionales, numerosos pobladores fueron encarcelados, expulsados de sus tierras, y confrontados con gravámenes aplicados por daños y perjuicios.



Un afiche estatal de relaciones públicas de la provincia de Phitsanuloke: “devolver los bosques al país”.

Se han entablado demandas civiles y penales no solamente con relación a tierras de bosques sino también con respecto a otras tierras estatales, así como con algunos de los aproximadamente 410 casos que se han presentado contra activistas de P-MOVE, una red por la justicia social. En este caso también se

confiscaron tierras habitadas por pobladores, se encarcelaron pobladores, o se presentaron reclamos por daños y perjuicios contra ellos en tribunales civiles por dañar la naturaleza. (1)

Según Human Rights Watch, entre 2016 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia recibió más de 100 denuncias de tortura de las provincias meridionales de Pattani, Yala y Narathiwat, donde el ejército utiliza sistemáticamente una combinación de la Ley Marcial y el Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en un Estado de Emergencia para detener e interrogar a personas por un término de hasta 37 días sin interponer cargo alguno ni permitirles acceso a un abogado.

Y si bien el Consejo Nacional para la Paz y el Orden fue disuelto formalmente en julio de 2019, cuando asumió un nuevo gobierno, la actual constitución tailandesa protege a los miembros del Consejo y a cualquier persona que actúe bajo sus órdenes, eximiéndolos de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Numerosas críticas aducen que el Consejo sigue en gran medida intacto, ocupando posiciones de poder.

El caucho considerado un árbol criminal

Las plantaciones de caucho fueron declaradas ilegales en zonas estatales de bosque, de acuerdo con la política del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, pero el objetivo especial han sido las plantaciones a pequeña escala de los pobladores. Funcionarios militares y civiles han cortado árboles de caucho de los pobladores y los han obligado a firmar acuerdos para devolver al Estado la tierra en la que viven, bajo pena de quedar sujetos a acciones legales.

Los funcionarios estatales justifican estas acciones e intimidan a la población rural, en la que están enfocados, aduciendo que los pobladores son en realidad capitalistas o están respaldados por grandes empresas.



Funcionarios públicos eliminan árboles de caucho de los pobladores

Los pobladores: chivos expiatorios

En Tailandia se otorgaron concesiones madereras a empresas británicas mucho antes de la fundación del Departamento Forestal Real en 1896. Se continuó otorgando concesiones para plantaciones de árboles de teca a compañías británicas hasta alrededor de 1954, cuando se acabaron las concesiones a extranjeros, junto con el grueso de los recursos de teca del país. A esa altura, las empresas paraestatales (es decir, empresas de propiedad del gobierno o controladas total o parcialmente por él) comenzaron a trabajar a partir de

concesiones para la extracción de madera dura. Entre 1961 y 1985, la superficie boscosa del país se redujo del 53 al 28 por ciento. Entre 1981 y 1985, las tasas de deforestación de Tailandia se encontraban entre las diez más altas del mundo, y las actividades estatales de extracción maderera desempeñaron un papel destacado en la devastación.

En 1988 se prohibió la tala en Tailandia como resultado de los esfuerzos de las comunidades rurales por proteger los bosques, junto con una movilización popular ambiental que surgió luego de inundaciones catastróficas en el sur del país. Sin embargo, mientras el Ministro de Agricultura de esa época, que dispuso la prohibición, gozaba de una amplia aprobación pública por su medida, los sacrificios de los pobladores que habían impulsado esta protección de los bosques fueron en gran medida ignorados. Ellos, en lugar del Estado y las empresas, se convirtieron en los chivos expiatorios de la deforestación. La política oficial de conservación se centró en aplicar la ley contra las comunidades rurales.

¿Leyes de Bosque para quién?

A principios de 2018, la construcción de un proyecto de viviendas para funcionarios judiciales del gobierno tailandés en la ladera de la Montaña Suthep en Chiang Mai, concitó fuertes críticas públicas por haber destruido una zona de bosque denso. La tierra había estado originalmente en posesión del ejército y por lo tanto no había sido catalogada como tierra de bosque según la ley, pero estaba cerca de un Parque Nacional que, según los críticos, había sido invadido.

Para los manifestantes locales resultaba claro que no se medía con la misma vara: el Estado se apoderaba constantemente de las tierras de los pobladores y de bosques comunitarios esgrimiendo fines “conservacionistas”, pero él mismo era un infractor clave. A mediados de 2018, el gobierno se vio obligado a suspender el proyecto de viviendas y reforestar el lugar.

Una historia que continúa

Los intentos del gobierno tailandés por expulsar a la gente de sus tierras se remontan varias décadas atrás. Pero se volvieron especialmente violentos durante los gobiernos golpistas. Por ejemplo, el gobierno del Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz que llegó al poder con el golpe militar de 1991, lanzó un programa de reasentamiento para los pobladores empobrecidos que vivían en las llamadas tierras degradadas del Bosque de Reserva Nacional. De manera similar, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, ahora asediado por protestas lideradas por estudiantes aunque no está formalmente en el poder, se apoya en la injusta aplicación de la fuerza militar y estatal para llevar adelante su política de recuperar tierras de bosque a través de los tribunales.

La implementación de la política sobre bosques en Tailandia tiende a basarse en cifras sin fuentes que afirman que el país “debe” tener un 40 por ciento de cobertura forestal, alrededor de 20,5 millones de hectáreas. Actualmente, alrededor del 42 por ciento está clasificado legalmente como tierra boscosa, aunque gran parte de ella tiene pocos árboles. Eso convierte al menos a 1,9 millones de habitantes del país, o alrededor de 636.000 hogares y un número indeterminado de comunidades, en infractores oficiales cuyos derechos pueden ser violados legalmente sin que tengan muchos recursos a su disposición.

Seguramente vendrán más encarcelamientos y confiscaciones de tierras.

Pornpana Kuaycharoen, activista social de Tailandia con una larga experiencia laboral en temas de bosques y tierras. Es la coordinadora de la ONG Land Watch Thai.

Land Watch Thai es una pequeña organización que trabaja en temas relacionados con la tierra en Tailandia, tanto a nivel local como político.

(1) Boletín 229 del WRM, 2017, Conflictos forestales en Tailandia: el Estado contra el pueblo, <https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/conflictos-forestales-en-tailandia-el-estado-contra-el-pueblo/>

(2) Human Rights Watch, Thailand 2019, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/thailand>

RSPO: la tercerización de la reglamentación ambiental a las empresas y la industria de la palma aceitera

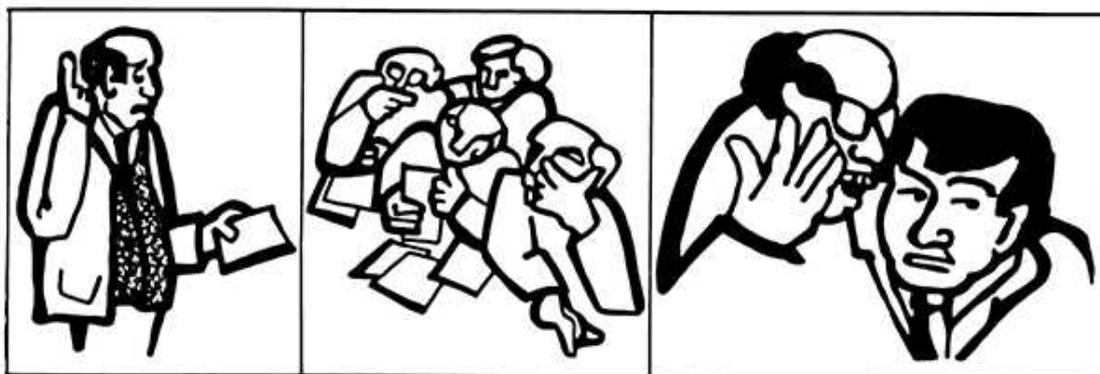


Ilustración: Militante Rini Templeton. RiniArt.com

Definiciones distorsionadas de la sustentabilidad están convirtiendo a pequeños agricultores en villanos. Sin saberlo, los consumidores hacen peligrar la idea de sustentabilidad y ayudan a darle más poder a manos ya poderosas, al aceptar y así legitimar los falsos estándares de sostenibilidad establecidos por las grandes empresas.

El eco-consumismo y la responsabilidad social empresarial de carácter voluntario supuestamente hacen más eficiente el mercado, al permitir que los consumidores impulsen a las empresas hacia mejores estándares de producción. La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés), es un ejemplo de ello. La RSPO es una organización de vigilancia de la industria del sector palmícola, en respuesta a las preocupaciones de comunidades y ONGs con respecto a prácticas ambiental y socialmente dañinas de la producción de aceite de palma, actuando como garantía contra prácticas de producción destructivas. (1) La RSPO surgió de una crisis. La crisis de inestabilidad ecológica provocada por la destrucción empresarial ha contribuido fuertemente a una crisis de la legitimidad de la práctica e ideología del capitalismo, cuestionando la hegemonía del sistema. La RSPO, y otros programas similares, pueden utilizar esas crisis no para cambiar o construir un sistema más equitativo o ecológicamente saludable, sino para fortalecer y reforzar el terreno para su propio beneficio.

Dirigido por y para empresas del sector del aceite de palma, el grupo define los estándares de referencia de la sustentabilidad por los cuales se juzgan las prácticas de producción. Los miembros de la RSPO son auditados por auditores aprobados por la RSPO y reciben un

certificado de sostenibilidad, de manera que los consumidores, en su mayor parte del Norte global, pueden comprar con la conciencia tranquila, sabiendo que las galletitas, la pasta de dientes o el champú que están comprando no han sido causa de deforestación, expulsión de comunidades o muerte de orangutanes.

Pero hay una gran falla en programas como la RSPO, conocida en la teoría económica como el “riesgo moral”: la RSPO le permite a los productores que tienen un interés particular en minimizar los costos y la complejidad de la producción, el definir normas éticas de funcionamiento y producción que legitiman sus actividades. Los productores que no cumplen (o no pueden cumplir), son castigados moralmente y excluidos de la sociedad comercial “aceptable”. Son los propios productores quienes definen los estándares por los cuales son juzgados, y entonces se les da a los consumidores la “libertad”, pero también (confusamente) la responsabilidad para elegir los productos -dentro de un marco de valor establecido por quienes quieren que los consumidores compren el producto.

Para ver cómo y por qué esto no es una solución a la deforestación, y por qué en general todo el modelo es engañoso, es útil entender algo del concepto y la estructura de la RSPO.

El concepto: un crimen en formación

La RSPO es un acuerdo entre empresas y ONGs. La mayoría de los miembros de la RSPO son fabricantes de bienes de consumo, procesadores de palma aceitera y comerciantes, en su gran mayoría de Europa y Estados Unidos (2), entre ellos Walmart, Nestlé, Mondelez y L'Oréal. (3) Comenzó en 2002 como una cooperación informal entre WWF (una gran ONG ambiental internacional) y Aarhus United UK Ltd (productor de aceites y grasas), Migros (una cadena de supermercados suiza), la Asociación de Aceite de Palma de Malasia, y Unilever (una empresa de bienes de consumo). En la actualidad incluye a la agroindustria y a los principales compradores de aceite de palma, entre los cuales WWF, Unilever y la Asociación de Aceite de Palma de Malasia tienen un peso particular. (4) Es evidente que para Unilever y la Asociación de Aceite de Palma de Malasia el aceite de palma es fundamental para sus ingresos, pero los lectores y lectoras pueden pensar: “¡Ah, qué bien: WWF les pedirá que rindan cuentas!”. Pero recuerden: WWF, como la mayoría de las ONG conservacionistas, depende de la financiación empresarial para sobrevivir y es difícil responsabilizar a las personas que les dan de comer. WWF también ha sido particularmente influyente en la construcción de un relato del consumo responsable a través de otros sistemas de certificación, entre ellos el FSC para productos de madera y papel, MSC para pescados y mariscos, la Mesa Redonda sobre Soja Responsable y otros. La ONG ambiental global ha sido durante mucho tiempo defensora de iniciativas que favorecen a las empresas y al crecimiento. Ahí de nuevo aparece el problema del riesgo moral.

El proceso de establecimiento de estándares está plagado de riesgo moral. La RSPO es una iniciativa para el establecimiento de estándares. No es un organismo de control legal ni una agencia de aplicación de las leyes, en cuyo caso sería responsable de estrictos controles legales y códigos de conducta. Por el contrario, el mercado (ese concepto nebuloso que siempre cambia de forma) es el que establece los estándares, el que vigila y el organismo de aplicación.

Quienes formulan las reglas (es decir, el grupo de miembros empresariales y ONGs de la RSPO) también gestionan el proceso de supervisión y auditoría de la RSPO. La supervisión y auditoría la realizan actores designados por la industria (no por el gobierno) a quienes

también les paga la industria: un gran conflicto de intereses. Es voluntario, en el sentido de que las empresas deciden si unirse o no al programa, pero la falta de certificación coloca a los productores moralmente en una zona gris, altamente subjetiva, donde sus productos son juzgados como “malos” de acuerdo con los estándares establecidos por actores que ya dominan la cuota de mercado. Y al otro lado de la cadena de producción, este sistema de establecimiento de estándares reglamentado por el mercado también juzga moralmente a los consumidores de clase media que no compran sus productos: “¿no compras aceite de palma ‘sostenible’? ¿No compras un champú certificado? Debes ser moralmente muy reprochable: recuérdame que no me asocie contigo”.

¿Dónde hacer lo correcto?

Para aceptar el concepto de que un consumidor bien informado marca el camino de las redes de producción de las empresas a través de decisiones ecológicamente responsables a la hora de comprar, también hay que aceptar toda una forma de concebir la “libertad”.

Para ser justos, el consumo responsable (o ecológico) parece una buena idea al principio: si crees en el sufragio universal, entonces tiene sentido votar con tu dinero. Ésta es la lógica: si las empresas demuestran que son “sostenibles”, ganarán una mayor cuota de mercado; las insostenibles se convertirán en parias del mercado. Se aprovecha la democracia del mercado para hacer que cada euro, dólar y franco cuente en la caja del supermercado. Desafortunadamente, esto supone que la elección es de tipo comercial.

Los supermercados, donde los consumidores pueden elegir productos de aceite de palma sostenibles, están contruidos para el consumo y son espacios ‘no creativos y anti-elección’, donde las personas confinadas solo son “libres” para consumir. Son lugares donde los compradores (no personas) vienen a comprar cosas. No están diseñados para mejorar el entorno natural. Sin embargo, astutamente, las empresas han alentado a los consumidores a sentirse culpables por los problemas ambientales que, se les dice, provienen del consumo excesivo; (6) ¡pero todo está bien! ¡Hay algo nuevo llamado ‘consumo ético’ que nos redime del exceso de consumo! Así que los espacios diseñados y contruidos para que consumamos se han modificado y ahora ofrecen el perdón por un precio, como el platillo de la iglesia donde se recoge el diezmo. Pero aparte de ser moralmente podrida, esta solución conveniente ni siquiera es una muy buena opción comercial para el consumidor: los consumidores juzgan los productos por los estándares y valores concebidos por las mismas empresas que venden el producto. ¡¿Qué puede salir mal?! Es como si los estafadores y asesinos redefinieran el fraude y el asesinato y luego invitaran a un jurado, compuesto por sus amigos y pares, a juzgar su comportamiento.

La falla final y fatal de la idea del ‘consumidor responsable’ es que la mayoría de los consumidores no tienen el conocimiento, el contexto o el tiempo para confirmar si un producto está correctamente etiquetado, si los ingredientes de ese producto se han obtenido o procesado de manera sostenible, o si los objetivos ‘sostenibles’ de las empresas productoras son ecológica o socialmente razonables. Esto no es una declaración de principios: todo el proceso de producción y la evaluación de la sostenibilidad son extremadamente complejos.

Para que el concepto de ‘consumidor responsable’ funcione, los consumidores también tendrían que actuar colectivamente en grandes números para cambiar cualquier producto que no les guste. Gestionar la huella ecológica del planeta para que una sociedad global

infinitamente diversa viva de forma sostenible es un tema complicado y especializado que no se puede resolver con el mismo enfoque para todos. Su seriedad se ve socavada por la idea de que el público en general puede ser el vigilante de la protección del medio ambiente y de la sociedad. Aun así, el sector de bienes de consumo, los productores de aceite de palma y algunas ONG sugieren que los consumidores deben ser el punto final del control de su código de conducta. Dar a entender, como hacen algunos miembros de la industria, que los consumidores son responsables de la degradación ambiental debido a sus 'demandas' de consumo, fomenta esta lógica. (7)

A simple vista la RSPO da la apariencia de 'hacer algo'; pero esto es engañoso y en realidad actúa como una cortina de humo, ocultando las consecuencias ecológicamente dañinas de toda la red de producción y consumo que sustenta la industria de la palma aceitera.

Una lógica moralmente ruinosa

La RSPO emite certificados que garantizan estándares de sostenibilidad que son manejados por los mismos productores a los que luego juzga. Al mismo tiempo, la legitimidad del Estado para dictar y arbitrar leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería ser el que establece los estándares de sostenibilidad. Legalmente, entonces, el mercado tiene menos competencia como árbitro de la legalidad. Muy astuto.

Como estocada final, los procedimientos operativos escritos por las grandes empresas son complicados y costosos para las pequeñas empresas, los pequeños agricultores y los trabajadores independientes. Con demasiada facilidad los estándares criminalizan a los pequeños operadores vulnerables que no pueden permitirse cumplir con un sistema económico y legal que en realidad se ha construido para excluirlos.

Todo esto sería ya bastante despiadado si es que el resultado fuera lograr un sistema ecológicamente más sostenible. Pero ni siquiera hace eso: simplemente redistribuye más poder en manos de los que ya son poderosos, vuelve más precarios a los actores más pequeños y debilita aún más el concepto de sostenibilidad. Mientras tanto, los bosques continúan ardiendo.

La Dra. Bernice Paxton-Lee es autora de *Forest Conservation and Sustainability in Indonesia: A Political Economy Study of International Governance Failure*, publicada en 2020 por Routledge (<https://www.routledge.com/Forest-Conservation-and-Sustainability-in-Indonesia-A-Political-Economy/Maxton-Lee/p/book/9780367173463>), y *A Chicken Can't Lay a Duck Egg: How Covid-19 can solve the climate crisis*, publicada en 2020 por Changemakers Books (<https://www.johnhuntpublishing.com/changemakers-books/our-books/resetting-our-future-chicken-cant-lay-duck-egg>).

(1) H. Rogers, *Green Gone Wrong: Dispatches from the Front Lines of Eco-Capitalism* (London: Verso, 2010), 185

(2) RSPO

(3) RSPO, 'RSPO - Who We Are', 2017, <http://www.rspo.org/about/who-we-are>

(4) B. Richardson, 'Making a Market for Sustainability: The Commodification of Certified Palm Oil', *New Political Economy* 20, no. 4 (2015): 545–68.

(5) A. Kenis and M. Lievens, 'Greening the Economy or Economizing the Green Project? When Environmental Concerns Are Turned into a Means to Save the Market', *Review of Radical Political Economics* 48, no. 2 (2016).

(6) I. Fontenelle, 'From Politicisation to Redemption through Consumption: The Environmental Crisis and the Generation of Guilt in the Responsible Consumer as Constructed by the Business Media', *Ephemera: Theory & Politics in Organization* 13, no. 2 (2013): 339–66.

(7) K. Ellison and K. Wellner, 'Research, Ethics, and Society (RCR); Professionalism and Social Responsibility', CITI Program | Collaborative Institutional Training Initiative, 19 December 2013, <https://www.citiprogram.org/members/index.cfm?pageID=805&intModuleID=15203>

RECOMENDADOS

Tribunal Africano de los Pueblos en contra de las empresas de plantaciones industriales

Amigos de la Tierra organizó la Primera sesión del Tribunal de los Pueblos Africanos (*African Peoples Tribunal*) en Lagos, Nigeria, en noviembre de 2020. Las comunidades afectadas y la sociedad civil presentaron testimonios sobre casos de violaciones de derechos humanos y degradación ambiental relacionados con plantaciones de monocultivos de árboles en diez países de África. En todos los casos se encontró que son los bancos de desarrollo, bancos privados, fondos de inversión y fondos de pensiones de todos los rincones del mundo los que controlan y financian las controvertidas empresas de plantaciones de caucho, aceite de palma y madera. Entre las empresas acusadas se encontraban Socfin, Green Resources AS, Golden Veroleum Liberia (controlada por Golden Agri-Resources), SIAT SA, OLAM y PZ Wilmar. Pueden ver más información en inglés y francés aquí y aquí.

<http://africanpeoplestrimony.org/resources/documents/>

<https://foe.org/news/african-peoples-trimony-to-dismantle-power-of-industrial-plantation-corporations-building-people-power/>

2020: un año de resistencia y rebelión

La ONG Focus on the Global South lanzó recientemente su boletín con un mensaje de Asia, donde, a pesar de la pandemia y todas sus consecuencias, el estado de ánimo dominante es el de rebelión, no de desesperación. Haciendo frente al riesgo de contagio y desafiando las leyes de emergencia que prohíben las protestas masivas y restringen severamente la libertad de expresión, personas de India, Tailandia, Indonesia, Filipinas y otros países se han estado reuniendo durante los últimos meses para defender la democracia participativa, la justicia y los derechos de los pueblos, así como a construir resistencia contra el aumento de la autocracia y el poder empresarial. Pueden leer los artículos incluidos en el boletín (en inglés) aquí.

<https://mailchi.mp/da11cb8dcda4/2020-a-year-of-resistance-and-defiance?e=825af4c4dd>

Una explicación de los nuevos mercados financieros sobre la destrucción de la naturaleza

Los recientes llamados a la acción para resolver la crítica pérdida de la diversidad biológica han llegado muy tarde pero a la vez son muy bienvenidos, pero falta un debate sobre el "cómo". Y el "cómo" es posiblemente tan importante como el objetivo principal. La ONG Green Finance Observatory ha publicado un video que explica las amenazas que se esconden detrás de los principales mecanismos utilizados para financiar aún más la destrucción de la naturaleza. Los instrumentos e iniciativas explicados en el video incluyen la compensación, las soluciones basadas en la naturaleza, las emisiones netas cero, el capital natural, entre otros. Pueden acceder al video (en francés con subtítulos en inglés) aquí. https://www.youtube.com/watch?v=jhnZJOOJ_E0&feature=youtu.be

Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos utilizando la siguiente fuente:
Boletín 249 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): “Crimen, poder e impunidad en los bosques” (<https://wrm.org.uy/es/>)

[Suscríbete al Boletín del WRM](#)

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques. La suscripción es gratuita.

¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM
“Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación”
[Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link](#)

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editora: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Jutta Kill, Winfridus Overbeek y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Avenida General María Paz 1615 oficina 3. CP 11400, Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943

wrm@wrm.org.uy - <http://wrm.org.uy/es/>